EXPEDIENTE No.: ****
QUEJOSA/VÍCTIMA: QV1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
25/2015
AUTORIDAD
DESTINATARIA: DIRECCIÓN GENERAL
DEL SISTEMA DIF
SINALOA

Culiacán Rosales, Sin., a 30 de abril de 2015

LIC. JORGE MILLER BENÍTEZ,
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 3º; 4º Bis; 4º Bis C y 77 Bis de la Constitución Política del Estado; 1º; 2º; 3º; 5º; 7º fracciones I, II y III; 16 fracción IX; 28; 57 y demás relativos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa; 1º; 4º; 77, párrafo cuarto; 94; 95; 96; 97 y 100 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente ****, que derivó de la queja presentada por la señora QV1.

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, párrafo segundo y 51, ambos de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa y 10 de su reglamento interno. Dichos datos se pondrán en conocimiento de la autoridad recomendada, a través de un listado adjunto en que se describe el significado de las claves utilizadas, previo el compromiso de que ésta dicte las medidas de protección correspondientes, y visto los siguientes:

I. HECHOS

En su escrito de queja, QV1 expresó que ella y su esposo se encontraban viviendo en los Estados Unidos con sus cuatro hijos de nombres V2, V3, V4 y V5, pero en el año 2008 decidieron regresarse de aquel país viniendo a radicar a la localidad de ****, Sinaloa, Sinaloa.

Asimismo, señaló que su esposo iba y venía de los Estados Unidos pues allá tenía su trabajo, por lo que en el año 2010 decidieron separarse llevándose su pareja a su hijo el mayor de nombre V2 sin su consentimiento y después regresó

llevándose a sus otros hijos, razón por la cual acudió ante la Secretaría de Relaciones Exteriores donde la apoyaron para que acudiera ante la Corte de Estados Unidos, donde un juez ordenó que los niños regresaran con ella a este país.

Sin embargo, una de sus hijas cuando hablaba por teléfono con su padre le expresaba que quería irse a vivir con él, por lo que en febrero de 2013 llegó a su domicilio una trabajadora social del DIF de Guasave, la cual le solicitó que la acompañara a la escuela de sus hijos, para que le hiciera entrega de los niños a su padre y pudiera llevárselos de nuevo a los Estados Unidos, pero como no accedió, se llevaron a sus hijos a una casa hogar y al día siguiente los niños firmaron un documento donde expresaban su deseo de irse con su padre, dejándole sólo a la niña más pequeña.

Lo cual comunicó a su abogada en Estados Unidos, quien le informó que el juicio aún no terminaba por lo que el juez ordenó nuevamente le hicieran la entrega de todos sus hijos.

Sin embargo, su ex pareja los entregó en casa de uno de sus hermanos y al ir por ellos, los niños se negaron a irse con ella, por lo que decidió respetar su decisión, llegando en ese momento una patrulla de policía, informándole que había un reporte y que le llamaba vía telefónica una licenciada de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Guasave, quien le manifestó que no podía llevarse a sus hijos porque existía una denuncia en su contra y que próximamente le llegaría una notificación para que acudiera a esas oficinas.

Por lo que decide acudir para conocer sobre qué trataba dicha denuncia, la cual resultó ser por maltrato; sin embargo, después de platicar con la agente social no le llegó ningún tipo de notificación y se dio cuenta de que sus hijos ni siquiera acuden a la escuela, sin que alguna persona los atienda.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Oficio número **** de fecha 10 de diciembre de 2013, dirigido a la agente del Ministerio Público del fuero común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Guasave, Sinaloa, a través del cual se solicitó informe de ley respecto a los hechos puestos en conocimiento en el escrito de queja.
2. Oficio número **** de fecha 10 de diciembre de 2013, dirigido al Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, por el cual se solicitó informe respecto a los hechos puestos en conocimiento en el escrito de queja.

3. Oficio número **** de fecha 10 de diciembre de 2013, dirigido al Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF Sinaloa, Sinaloa, a quien se le solicitó informe respecto a los hechos puestos en conocimiento.

4. Mediante oficio número **** de fecha 11 de diciembre de 2013, recibido el 17 del mismo mes y año, la agente del Ministerio Público del fuero común, Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Guasave, Sinaloa, rindió el informe solicitado, en el cual comunicó lo siguiente:

Que con fecha 5 de agosto de 2013, esa representación social recibió escrito de querrela por parte del ex esposo de la quejosa, por la comisión del delito de violencia familiar cometido en contra del orden de la familia de los menores V2, V3 y V4, la cual fue ratificada en esa misma fecha, iniciándose la averiguación previa 1 radicada en contra de la señora QV1.

Asimismo, que en dicha indagatoria se llevaron diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos, así como también hizo del conocimiento que dentro de la misma no se ordenó el aseguramiento de los menores en cuestión, así como tampoco llevó a cabo llamada telefónica como lo indica la quejosa en su escrito de queja.

Por último, informó que declinó la competencia por razón de territorio a la agencia primera del Ministerio Público del fuero común de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, con fecha 5 de octubre de 2013.

5. Oficio número **** de fecha 14 de diciembre de 2014, a través del cual se solicitó informe a la Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF de Sinaloa, Sinaloa, respecto a los hechos puestos en conocimiento.

6. Oficio número **** de fecha 14 de enero de 2014, dirigido al Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, a través del cual se requirió informe respecto a los hechos puestos en conocimiento por la hoy quejosa.

7. Mediante oficio número **** de fecha 27 de enero de 2014, recibido el 29 siguiente, el SP1 actual Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, rindió informe en el cual comunicó:

Que esa Procuraduría después de haber hecho una búsqueda minuciosa en los archivos encontró oficio número **** de fecha 8 de febrero de 2013, mediante el cual AR1 giraba oficio a la administradora de la Casa Hogar “****”, por medio

del cual autorizaba para que los menores V3, V4 y V5, quienes se encontraban internados en dicha casa hogar se fueran a vivir los dos primeros con su padre y la menor con su madre QV1.

Asimismo, informó que no existe documento alguno que lo acredite, pero en entrevista con AR1 refirió que presentó denuncia sobre e

Público del fuero común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, lo cual fue corroborado por el agente social quien le manifestó que la indagatoria había sido remitida por incompetencia en razón de territorio a la agencia del Ministerio Público del fuero común de Sinaloa de Leyva, Sinaloa.

8. Mediante oficio sin número de fecha 31 de enero de 2014, la Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF de Sinaloa, Sinaloa, rindió el informe solicitado a través del cual comunicó lo siguiente:

Que habiendo realizado una minuciosa búsqueda en los archivos de esa oficina a su cargo se encontró documento grabado en equipo de cómputo de fecha 27 de febrero de 2012, relativo a la comparecencia de la señora QV1, pero físicamente no se encontró documento alguno que refiera a dicha investigación.

9. Acta circunstanciada de fecha 21 de febrero de 2014, en la que se hace constar que se realizó llamada telefónica a la hoy quejosa a efecto de comunicarle las respuestas realizadas por parte de las autoridades; sin embargo, la comunicación no pudo concretarse debido a que la línea enviaba directamente a buzón.

10. Acta circunstanciada de fecha 14 de marzo de 2014, en la cual se hizo constar llamada telefónica realizada al agente del Ministerio Público del fuero común con sede en Sinaloa, Sinaloa, quien hizo del conocimiento que efectivamente había recibido la averiguación previa 1 por parte de la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Guasave, Sinaloa, registrándola con la averiguación previa 2, señalando además, que ya contaba con la declaración de la señora QV1, que incluso dicha persona había aportado algunas probanzas para acreditar que los hechos que le atribuyen son falsos.

11. Acta circunstanciada de fecha 19 de marzo de 2014, en la que se hizo constar la comparecencia de la señora QV1, quien presentó copia simple de su escrito de denuncia ante la agencia social para ser agregada como elemento de prueba.

12. Con oficio número **** de fecha 8 de mayo de 2014, se notificó a la señora QV1 en relación a lo actuado en el procedimiento de queja con la finalidad de

ponerla en conocimiento y expresara ante este organismo lo que a su derecho conviniera.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

Con fecha 7 de febrero de 2013, la hoy quejosa expresó que su ex esposo, en complicidad con la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, llevaron un proceso por demás ilegal y violatorio a sus derechos humanos, toda vez que sin contar con una orden judicial se llevaron a sus hijos V3, V4 y V5 los cuales en esos momentos se encontraban en la escuela donde cursaban sus estudios, llevándoselos consigo la Casa Hogar “****”, en la ciudad de Guasave, Sinaloa.

Al día siguiente, 8 de febrero de 2013, AR1, entonces Delegado de dicha Procuraduría, emitió documentos de acta de entrega de sus hijos, sintiéndose obligada en hacer entrega de los dos hijos mayores a su ex pareja y dejándola con la menor de sus hijas, a pesar de que ella contaba con documentación en la que se hacía constar que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito **** dictó sentencia en la que se ordenaba la entrega inmediata de sus tres hijos.

De acuerdo a lo manifestado por SP1, Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, respecto a los hechos puestos en conocimiento por la señora QV1, informó que después de una búsqueda en sus archivos encontraron oficio número **** de fecha 8 de febrero de 2013, en el cual AR1, entonces Delegado, giraba oficio a la administradora de la Casa Hogar “****” autorizando la entrega de los menores V3, V4 y V5, para que los dos primeros se fueran con su padre y la última con su madre, sin que encontraran otra documentación que sustentara dicho acto de entrega.

IV. OBSERVACIONES

De suma relevancia son en cuanto al presente caso las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en su artículo 1º, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, donde se modifica la denominación del Capítulo I, Título Primero, designándolo “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, en el que se pondera el bienestar de la persona, mayormente si se trata de quienes por su falta de capacidad e inmadurez no pueden adoptar determinaciones de autodefensa de sus derechos, como es el caso de los menores de edad.

En tal sentido se exige a todo funcionario público constriña su actuación al respeto de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna así como por tratados internacionales.

Lo anterior implica por parte de los servidores públicos una conducta de acción u omisión, según exija el caso, pero en ningún momento de indiferencia o arbitrariedad, pues de constituirse ésta pone de manifiesto la transgresión al derecho a la seguridad jurídica que todo acto de autoridad debe generar con el apego de su conducta a lo estipulado en el orden jurídico mexicano.

En el caso que nos ocupa, existió por parte de AR1, entonces Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, una conducta irregular que contravino la normatividad que regula su actuación, y violentó derechos humanos de las personas que aquí se enumeran.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: A la seguridad jurídica

HECHOS VIOLATORIOS ACREDITADOS: Indebida prestación del servicio público y violación al interés superior de la niñez

A partir de que el derecho a la seguridad jurídica comprende *“la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio”*.¹

Significa entonces que los servidores públicos son los encargados de respetar los límites establecidos por las legislaciones que regulan su actuación.

En el caso que nos ocupa, tenemos que el entonces Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, con fecha 8 de febrero de 2013 giró oficio a la administradora de la Casa Hogar “****”, a través del cual autorizaba la entrega de los menores V3, V4 y V5, quienes se encontraban internos en dicha casa hogar, a efecto de que se fueran a vivir los dos primeros con su padre y la menor con su madre QV1.

Quedando acreditado lo anterior con el oficio firmado por el citado servidor público, el cual obra en autos del presente expediente.

Sin embargo, no existe documento alguno con el cual se pueda acreditar que el ex esposo de la quejosa haya solicitado el inicio de alguna investigación en dicha instancia con motivo de alguna posible conducta delictuosa cometida por parte de QV1, u otra conducta que afectara el bienestar de sus menores hijos.

¹ Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Editorial Porrúa, México, 2008, p. 1.

Así como tampoco se acreditó con documento alguno de que se haya llevado tal investigación de manera oficiosa.

Solamente se hizo saber por parte de la autoridad que se había dado vista a la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar con sede en Guasave, Sinaloa, a efecto de que se iniciara averiguación previa en contra de la señora QV1.

Lo cual no resulta suficiente para que dicho servidor público actuara como lo hizo, toda vez que no existe soporte documental alguno con el cual se acredite que haya habido una investigación por parte de esa Procuraduría, en la cual se haya determinado la necesidad de separar a los menores de la guarda y custodia de la madre e internar a estos en una casa hogar hasta en tanto los padres llegaran a algún tipo de convenio en cuanto a la guarda y custodia de los mismos.

Si bien es cierto dicho servidor público se encontraba autorizado a través de la vía conciliatoria para fomentar el bienestar familiar, tal y como lo establece la fracción I del artículo 62 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, tal facultad se ve limitada con la fracción IX del mismo precepto, ya que el actuar de éste se encuentra supeditado a que la conducta de que conoce no sea considerada como delito.

Limitante que fue pasada por alto por el citado servidor público, pues no obstante la obligatoriedad que de ella emana, a la autoridad sólo le bastó el dicho del padre para separar a los menores de su madre e ingresarlos a una casa hogar, sin antes haber iniciado una investigación, tal y como se hizo del conocimiento a esta CEDH, en que se señaló que no se había encontrado en sus archivos ninguna investigación al respecto.

Asimismo, el SP1 hizo del conocimiento de que el Delegado anterior, según le dijo había dado vista a la agencia del Ministerio Público del fuero común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar de Guasave, Sinaloa, pero no se especificó la fecha en que esto sucedió, no obstante, al momento de solicitar información a dicho representante social señaló que fue el día 5 de agosto de 2013 que se recibió escrito de querrela por parte del entonces esposo de la quejosa por la comisión del delito de violencia familiar cometido presuntamente por la señora QV1, pero no por el servidor público de referencia.

Asimismo, señaló que esa agencia social no ordenó el aseguramiento de los menores de referencia como medida, por las contradicciones de los propios padres.

De lo anterior, se puede advertir que se desconocen las razones por las cuales AR1, entonces Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, ordenó sin investigación alguna el internamiento de los niños, así como los argumentos que sirvieron de sustento para hacer entrega de los dos niños de más edad al ex esposo de la quejosa y la niña menor a la señora QV1.

Determinación que, a juicio de esta CEDH, es considerada como arbitraria, pues no obstante que el adoptar este tipo de medidas que se supone vinieron a solicitud expresa por parte del padre de los menores, según se advierte de las constancias allegadas a la investigación que nos ocupa, dicho servidor público no podía tomar tal decisión, en virtud de que no se había llevado a cabo previamente una investigación, por lo que su actuación no fue apegada a derecho, sino que fue completamente arbitraria y discrecional.

En el caso que nos ocupa, no fueron respetados los límites que impone la propia normatividad, ya que si bien los principios que rigen el procedimiento de protección ante la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia serán aplicados en defensa del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, deberá ser con estricto respeto al debido proceso, siempre que sus derechos sean amenazados o violados por alguna de las siguientes causas que el propio artículo 74 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa contempla, como es el caso de la fracción I, que establece: “*Acción u omisión de los particulares o del Gobierno*”; así como también la fracción II, “*Falta, omisión o abuso de quienes ejerzan la patria potestad o su guarda*”.

Dicho ordenamiento legal en su artículo 75 establece que cuando cualquiera de los supuestos sea materializado “*y no exista un pronunciamiento judicial*”, será la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia quien deberá realizar ante el Juez de lo Familiar el trámite correspondiente, como viene a ser “*la suspensión del cuidado, la guarda y el depósito provisional*”, entre otras que detalla, de lo que se desprende que sólo la autoridad jurisdiccional es la facultada para decretar la suspensión de la guarda de menores y no el Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Mneor como lo hizo.

Pasando por alto, también, el interés superior de los tres menores involucrados, ya que la infancia pasa de ser un objeto de protección, para convertirse en sujetos de pleno derecho que deben recibir protección integral, la cual el Estado y la sociedad deben garantizarles.

El ejercicio de los derechos fundamentales de las niñas y niños, por encima de cualquier interés, incluyendo el de sus padres, es un punto sumamente importante, pues al ser la infancia concebida ya como sujeto de derecho, los menores pueden ejercerlos en todos los juicios en que se vean involucrados y las

autoridades en este caso, las judiciales, están no sólo obligadas a realizar todas las diligencias necesarias, allegarse de elementos y pruebas, procurando siempre salvaguardar el interés superior del menor y garantizar el ejercicio de sus derechos. Cuando se anteponen los derechos de la infancia con los de sus padres, la autoridad judicial tiene la obligación de ponderar por encima de cualquier otro, ese derecho infantil.

En 2007 la Primera Sala de la SCJN, al resolver el amparo directo en revisión 908/2006, adoptó expresamente un criterio emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al señalar que:

“No. Registro: 172,003

Tesis aislada

Materia(s): Civil

Novena Época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XXVI, Julio de 2007

Tesis: 1a. CXLI/2007

Página: 265

INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO.

En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, *los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño'... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño".*

Amparo directo en revisión 908/2006. 18 de abril de 2007. Unanimidad de cuatro votos.

Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.”

En atención a lo anterior, queda acreditado que el día 7 de febrero de 2013, el entonces Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, llevó a cabo actos de autoridad por demás ilegales

violentando los artículos 4º, 14, 16 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al enviar a personal de esa Procuraduría a casa de la hoy quejosa, para posteriormente dirigirse a la escuela donde estos se encontraban y sin contar con una orden judicial que sustentara su actuar se llevaron a sus tres hijos, para internarlos en la Casa Hogar “****”, en la ciudad de Guasave, Sinaloa.

Conducta que como se expresó anteriormente no se limitó al aseguramiento sin orden judicial alguna, sino también se demostró que con fecha 8 del citado mes y año, el mismo servidor público emitió un oficio dirigido a la encargada de la Casa Hogar para que hiciera entrega de dos menores al ex esposo de la quejosa y a la menor a la señora QV1, sin llevar cabo algún tipo de investigación para que se desahogaran las diligencias necesarias que llevara a esta determinación, en virtud de que no contaba con prueba alguna que indicara la existencia de violencia familiar hacia sus hijos por parte de la hoy quejosa.

Con relación a dicho punto, es preciso destacar que la naturaleza de la institución a la que pertenece el servidor público señalado como responsable, mismo que no obstante estructural y presupuestalmente se encuentre dentro de la administración municipal, orgánicamente se ubica en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sinaloa, pues atendiendo lo dispuesto por el artículo 70 párrafo segundo de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, se establece que *“La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia es un área administrativa del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia con competencia estatal, la cual puede establecer en los municipios las delegaciones que se consideren pertinentes”*, tal es el caso que nos ocupa.

Al atender tal disposición legal, es AR1, quien fungía como Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, y fue en él en quien recayó la obligatoriedad de cumplir con las funciones específicas que prevé el artículo 71 del ordenamiento invocado, como es, entre otras, *“conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar, cuando se vulneren los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes”*.

Toda vez, que no existe constancia de una investigación en la que se demostrara indicios de violencia por parte de la señora QV1 hacia sus hijos, de encontrarse en ese supuesto habría resultado absurdo e irresponsable la entrega de la hija menor en edad a la misma, cuando se tenía una acusación de esa naturaleza.

De igual manera, no pasa desapercibido también el hecho de que dicho servidor público tenía conocimiento de la existencia de un juicio promovido por parte de la hoy quejosa ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito ****, División ****, en donde se estaba disputando la custodia de los menores.

Así pues, de los aspectos que se le atribuyen al servidor público de referencia, evidentemente es factible atribuir a éste una prestación indebida del servicio público, al realizar una conducta que vino a consistir en acción u omisión que causó la negativa, suspensión, retraso o deficiencia de un servicio público, lo cual implicó un ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.

Que la conducta llevada a cabo por parte de dicho servidor público señalado como responsable, viene a trastocar el derecho humano a la seguridad jurídica, el cual corresponde a toda persona que acude ante los órganos encargados de procurar e impartir justicia, así como de la administración pública, pues es a través de dichas instituciones que al ciudadano deberá brindársele la certeza jurídica que requiere.

Lo anterior implica una sumisión por parte de todo servidor público para con las reglas, leyes o reglamentos que establecen la forma en que se desarrolla la actividad que emana del cargo público que desempeñan y en el caso que nos ocupa, ello no debe ser la excepción; los funcionarios que se desempeñan en un servicio público deben observar con exactitud no sólo la normatividad que localmente los rige, sino también la normatividad internacional que en materia de derechos humanos exista y las cuales son parte del marco jurídico aplicable, pues ello se traduce en una garantía para la comunidad, en el sentido de que la satisfacción de necesidades que realiza el Estado se somete a preceptos preestablecidos, impidiendo de esta manera todo tipo de arbitrariedades.

En ese contexto, observamos que AR1, Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, mostró un total desapego no sólo de la normatividad que rige su actuación, sino también de la normatividad que en materia de derechos humanos existe y que exige el irrestricto respeto al marco jurídico mexicano.

Conducta ésta reprochable por esta CEDH, ya que en un modelo de Estado democrático de Derecho como el que pretende alcanzar la sociedad sinaloense, no es posible la desatención de la norma que expresa la voluntad general para dar paso a la discrecionalidad.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, niños y adolescentes del Estado de Sinaloa.

“Artículo 71. La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, sin perjuicio de las facultades que le otorguen otras leyes, tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar, cuando se vulneren los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes;

.....

Artículo 72. Los principios del procedimiento especial de protección se aplicarán en defensa del interés superior de las niñas, niños y adolescentes. La administración pública del Estado deberá garantizar el principio de defensa y el debido proceso, relativo a las decisiones que pretendan resolver algún conflicto surgido en virtud del ejercicio de los derechos contemplados en este ordenamiento.

Artículo 73. En la instancia administrativa, el procedimiento especial de protección corresponde a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.

.....

Artículo 78. En casos de amenaza grave o violación de los derechos reconocidos en la presente Ley, el procedimiento especial de protección podrá iniciarse por denuncia presentada por cualquier persona o autoridad.

Artículo 79. Conocido el hecho o recibida la denuncia, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia constatará la situación, escuchará a las partes involucradas, recibirá las pruebas que ellas presenten y dictará inmediatamente las medidas de protección que correspondan.”

.....

Convención sobre los Derechos del Niño.

“Artículo 3º

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

.....

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.

Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.

.....

Estos derechos reconocidos también por nuestra Constitución local vinculan y se constituyen como una obligación directa de toda autoridad gubernamental, específicamente en lo que atañe a la protección de los derechos de los niños y niñas a efecto de materializar el principio internacional “del interés superior del niño”, pues ante todo debemos tener muy en cuenta que tras la noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres humanos, toda vez que los derechos del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se establece que los dispositivos de protección de los derechos de la infancia son complementarios -nunca sustitutivos- de los mecanismos generales de protección de derechos reconocidos a todas las personas, según lo contempla la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños.

En mérito de lo anterior, esta CEDH concluye que el servidor público referido apartó su actuación no sólo de los ordenamientos invocados en el cuerpo del presente apartado, sino también del precepto número 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la prohibición de transgredir la libertad, propiedades, posesiones o derechos de las personas, si no es a través de juicio pertinente seguido ante tribunales previamente establecidos, siempre y cuando las leyes expedidas con anterioridad al hecho así lo establezcan.

Con base a lo anterior, con fundamento en los artículos 1º párrafo tercero y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º fracción III; 55 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, existieron elementos de convicción suficientes para este Organismo Estatal en ejercicio de sus atribuciones a fin de que se proceda para la efectiva restitución de la afectada en sus derechos fundamentales en contra del personal de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Director General del Sistema DIF Sinaloa, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se dé inicio al trámite correspondiente de conformidad con lo que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, a fin de que se determinen las faltas en las que con su actuar irregular incurrió AR1, entonces Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, y una vez demostrada la responsabilidad administrativa en que a juicio de esta Comisión incurrió el citado servidor público, se le apliquen las sanciones correspondientes conforme lo dispone el artículo 17 de la citada ley.

Se requiere se envíe constancia de inicio y resolución del procedimiento administrativo correspondiente a esta CEDH.

SEGUNDA. Se gire instrucciones específicas para que el actual Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, al cumplir con las funciones que emanan del cargo que desempeña, se muestre respetuoso del marco jurídico que rige su actuación; absteniéndose de decidir sobre asuntos que corresponden a autoridades distintas a la que pertenece.

TERCERA. A manera de reparación del daño de los afectados, sírvase girar instrucciones al actual Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, a efecto de que adopte medidas necesarias para evitar caer en repeticiones y erradicar incidencias de casos como el que nos ocupa y que ha sido referido en la presente resolución.

CUARTA. Se capacite al personal adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema DIF en Guasave, Sinaloa, en torno al principio de legalidad, interés superior de la niñez y en general, sobre el respeto de los derechos humanos.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Jorge Miller Benítez, Director General del Sistema DIF Sinaloa, de la presente Recomendación misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 25/2015, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1° constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien y en caso de aceptación de la misma, deberán entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a la señora QV1, en su calidad de quejosa, de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO